

## INFORME DE ASESORÍA PRESTADAS A H.S XIMENA RINCÓN.

MARZO 2020

PH.D PAULINA GÓMEZ BARBOZA

I.PROPUUESTAS DE REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LOS TÍTULOS I y II QUE QUEDARON PENDIENTES EN LA DISCUSIÓN DEL BOLETÍN N° 12027-07 PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y MODIFICA NORMAS LEGALES QUE INDICA.

PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, INICIADO EN MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Y MODIFICA NORMAS LEGALES QUE INDICA.(BOLETÍN N° 12.027-07)		
NORMAS PENDIENTES		PROPUESTAS
TÍTULO I NORMAS PRELIMINARES		<u>Se sugiere retirar indicaciones 31 y 32</u>
TÍTULO I NORMAS PRELIMINARES		<u>Se sugiere aprobar el siguiente artículo 3° bis:</u>  <b>Artículo 3 bis.-</b> Serán sujetos de atención de las Oficinas Locales de la Niñez los egresados de todos los programas de protección especializada de este Servicio, cualquiera sea su edad durante los 24 meses siguientes a su egreso, para efectos del seguimiento y monitoreo de las medidas de protección de su competencia, de los planes de intervención contenidos en ellas, así como de su situación vital de conformidad con los

		establecido en la letra g) del artículo 54 de la Ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.”.
TÍTULO I NORMAS PRELIMINARES		<p><u>Se sugiere aprobar el siguiente artículo 4°</u></p> <p><b>Artículo 4.-</b> Principios rectores. El Servicio, en el ejercicio de sus funciones, deberá respetar los principios establecidos en el Título II de la Ley que establece el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. De igual forma, deberá respetar los principios de coordinación y articulación sistémica; de integralidad, especialización y flexibilidad; pertinencia y efectividad; visión de procesos y ciclo evolutivo; mejora continua, trabajo colaborativo y buen trato, especialmente, con los niños, niñas y adolescentes, y sus familias.</p> <p>En la ejecución de las prestaciones de protección especializada, el Servicio velará por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados</p>

		<p>internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y en la legislación nacional.</p> <p>El Servicio ejercerá sus funciones de una manera compatible con el derecho del niño, niña o adolescente a la vida familiar y priorizará el fortalecimiento de la familia. En caso de separación del niño, niña o adolescente de su familia, el Servicio se orientará a su revinculación, salvo que ésta no proceda según lo resuelvan los Tribunales de Familia, caso en el cual se iniciará el procedimiento de adoptabilidad del niño, niña o adolescente, o se preparará para la vida independiente, según corresponda.</p> <p>La separación del niño, niña o adolescente de su familia es una medida excepcional, que compete exclusivamente a los Tribunales de Familia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74° de la ley N° 19.968."</p>
<p>TÍTULO II</p> <p>ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES</p> <p>Párrafo 1°</p> <p>De la organización</p>		
	<p>(INCISO CUARTO PENDIENTE PROPUESTA DEL EJECUTIVO</p>	<p><u>Se sugiere votar la siguiente propuesta del Ejecutivo</u></p> <p>Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, suscrito</p>

		<p>además por el Ministerio de Hacienda, determinará la estructura interna del Servicio, de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con sujeción a la planta y dotación máxima del personal. Para estos efectos, deberán considerarse, a lo menos, una subdirección nacional y divisiones de administración y finanzas, de evaluación y gestión, y de servicios y prestaciones. Además, el reglamento deberá considerar como mínimo áreas funcionales como auditoría interna, estudios, planificación y control de gestión.</p>
<p>Párrafo 2° De las funciones del Servicio</p>		
	<p>b) Coordinar a los órganos de la Administración del Estado competentes con la red intersectorial y comunitaria, en los ámbitos de competencia del Servicio, cuando corresponda. Esta función será llevada a cabo especialmente por</p>	<p>Se sugiere aprobar la siguiente frase, luego de la locución “artículo 17”:</p> <p>“y estará dirigida a priorizar los sujetos de atención en la oferta intersectorial y a complementar la oferta de protección especializada que</p>

	la Comisión Coordinadora de Protección a que se refiere el artículo 17 (...), PENDIENTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA SEGUNDA ORACIÓN DE ESTA LETRA, CONTENIDA EN UNA PROPUESTA DEL EJECUTIVO.	entrega por sí o por terceros. Lo anterior, con carácter vinculante, previo acuerdo entre las entidades respectivas
	<p>c) PENDIENTE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE ESTA LETRA, CONTENIDA EN UNA PROPUESTA DEL EJECUTIVO.</p> <p>Letra c)</p> <p>Indicación N° 65</p> <p>65.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señores Montes y Quintana, para agregar después de la palabra “personalizado” el siguiente texto: “del desarrollo, adherencia y cumplimiento de los planes de intervención individuales, de la consecución de sus objetivos y metas, y de la evolución de la situación”.</p> <p>Indicación N° 66</p> <p>66.- De los Honorables Senadores señora Rincón y señores Montes y Quintana, para agregar a</p>	<p>Se recomienda aprobar la siguiente locución, luego del término “personalizado”:</p> <p>“del desarrollo, adherencia y cumplimiento de los planes de intervención individuales, de la consecución de sus objetivos y metas”.</p>

	continuación del vocablo “Servicio” el siguiente texto: “, su familia y entorno con el fin de evaluar los resultados, con la participación del niño, niña o adolescente y su familia, y mantener o modificar los compromisos e intervenciones planificadas	
--	--	--

II. PROYECTO DE LEY QUE PROHÍBE EL CORTE DE LOS SUMINISTROS DE AGUA POTABLE POR NO PAGO A TODO TIPO DE CLIENTE y DE ELECTRICIDAD EN LOS DOMICILIOS DE LAS PERSONAS QUE INDICA, A TODAS LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE DICHOS SERVICIOS BÁSICOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DURANTE EL AÑO 2020.

#### Idea Matriz.

El Proyecto de ley tiene como objeto como idea matriz asegurar, a las personas que indica, el suministro ininterrumpido de dos servicios esenciales para vivir con las mínimas condiciones de seguridad y dignidad requeridas, la crisis sanitaria y el aislamiento social provocado por la pandemia del Virus SARS-CoV2, Coronavirus.

En específico, tiene dos objetivos dentro de esa idea matriz.

Primero, tiene por objeto asegurar el suministro de agua potable en todos los domicilios, particulares o comerciales, durante el años 2020 con el fin de garantizar las mínimas conductas de higienización que la pandemia en curso demanda. Al efecto, el Proyecto plantea evitar el corte del suministro de agua potable por no pago, a todo cliente, dentro del año 2020, debiendo las empresas postergar el cobro de las boletas o facturas correspondientes para el año 2021. En el mismo sentido, propone la reposición de dicho suministro a todo tipo de cliente que, al momento de la entrada en vigencia de esta ley lo tenga suspendido por no pago, dentro del plazo máximo de 24 horas contados desde la entrada en vigencia de la ley propuesta.

Segundo, con el fin de no empeorar las condiciones de vida de personas que, por razones de salud o de carácter socio-económico ya viven su cotidianidad en

condiciones difíciles, mitigando en algo impacto social del COVID-19 , el Proyecto de Ley propone evitar los corte de energía eléctrica por falta de pago de las boletas o facturas correspondientes, en todos los domicilios donde residan los siguientes tres grupos de personas, en razón de su alta vulnerabilidad vital, económica y social:

- 1) Familias que pertenezcan al 60% de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
- 2) Personas electro-dependientes, sea que vivan en sus domicilios particulares o sean residentes en establecimientos de larga estadía para adultos mayores o ELEAM del Servicio Nacional del Adulto Mayor y Residencias de Protección de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la Red del Servicio Nacional de Menores.
- 3) Adultos mayores residentes en los ELEAM o establecimientos de larga estadía para adultos mayores que existen en el país, aún cuando no sean electro-dependientes.
- 4) Niños, niñas y adolescentes acogidos en Residencias de Protección pertenecientes a la Red de instituciones del SENAME, aún cuando no sean electro-dependientes.

Respecto de los domicilios, particulares o comerciales, en los que residan las personas antes referidas las empresas distribuidoras de energía eléctrica no podrán realizar cortes de suministro por falta de pago, durante lo que queda del año 2020, debiendo las empresas postergar el cobro de las boletas o facturas correspondientes para el año 2021. En el mismo sentido, se propone la reposición de dicho suministro en todos los domicilios en los que ellos residan que al momento de la entrada en vigencia de esta ley lo tenga suspendido por no pago, dentro del plazo máximo de 24 horas contados desde la entrada en vigencia de la ley propuesta.

#### Fundamentos.

1. El país se encuentra cursando la grave crisis sanitaria que se desarrolla a nivel mundial por la aparición del Virus SARS-Co V2, Coronavirus, que afecta a gran parte de los países del mundo.

La pandemia de la COVID-19 es una emergencia sanitaria y social mundial que requiere una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. Tal como lo declarasen 16 de marzo de 2020, en un esfuerzo coordinado por combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, el Secretario General del ICC, John W.H. Denton AO, y el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus han acordado que dichas instituciones colaboren estrechamente para garantizar que la comunidad empresarial mundial reciba la información más reciente y fiable, así como orientaciones específicas.

2. En el marco de tal esfuerzo conjunto, la ICC y la OMS declaran que “todas las empresas tienen un papel esencial que desempeñar minimizando la probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad. La adopción de medidas tempranas, audaces y eficaces reducirá los riesgos de corto plazo para los empleados y los costos de largo plazo para las empresas y la economía”.<sup>1</sup>

Dentro del Llamado a la Acción conjunta, “el ICC respalda firmemente el llamamiento lanzado por la OMS a los gobiernos nacionales de todo el mundo para que adopten un enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la sociedad en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Reducir la propagación de la COVID-19 y mitigar su impacto debería ser una de las prioridades máximas de los jefes de Estado y de gobierno. Las medidas políticas deben coordinarse con los actores del sector privado y la sociedad civil para lograr máxima resonancia y eficacia”.<sup>2</sup>

Añaden que, “los gobiernos deben comprometerse a habilitar todos los recursos necesarios para combatir la COVID-19 con la mínima demora posible y garantizar el funcionamiento efectivo y eficiente de las cadenas transfronterizas de suministro de productos médicos y otros bienes esenciales” y “que se deben adoptar medidas informadas y eficaces para proteger a sus trabajadores, clientes y comunidades locales”.<sup>3</sup>

No obstante, el 11 de marzo 2020, la OMS se declaraba “alarmado por la falta de actuación para frenar el virus” y afirmó que la consideración de pandemia “no

---

<sup>1</sup> <https://www.who.int/es/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-an-unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19>

<sup>2</sup> Ibidem

<sup>3</sup> Ibidem



puede ser una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado", porque nos llevaría a muertes y a un sufrimiento innecesario.<sup>4</sup>

**Adoptar medidas rápidas para evitar sufrimientos innecesarios, es justamente el fundamento esencial de este Proyecto de Ley.**

3. En este escenario, el agua potable y la energía eléctrica resultan ser, más que nunca, un bien esencial para la comunidad.

Lavarse las manos y limpiar las superficies, están entre los consejos esenciales que ha compartido el director de la Organización Mundial de la Salud para disminuir el contagio con el virus.

En efecto, la disponibilidad del agua, en el curso de esta crisis, es fundamental para desarrollar unas de la pocas conductas de auto cuidado y protección que las personas pueden desarrollar ante el contagio pandémico del Virus SARS-Co V2, Coronavirus. Debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurarnos que el suministro de ella no se vea interrumpido por atraso o falta de pago de las facturas o boletas de cobro correspondientes, en circunstancias que la salud y la vida de las personas depende en alto grado del uso constante del agua para lavarse las manos e higienizar espacios y superficies.

Es menester que el Estado de Chile ponga en marcha todas las medidas necesarias para asegurar a las personas un suministro ininterrumpido de agua potable a todos los clientes de las empresas sanitarias, sean de tipo domiciliario, comercial o industrial, prohibiendo a dichas empresas efectuar cortes de suministro fundados en el no pago de los servicios por parte de dichos clientes. Ello como una medida transitoria y excepcional, durante el transcurso del presente año 2020, que tiene por fin anteponer la disponibilidad permanente del agua para fines sanitarios y de higienización en protección de la salud de las personas, por sobre el cumplimiento oportuno de los pagos por los servicios entregados al usuario.

Del mismo modo, es imprescindible reponer en el plazo máximo de 24 horas, el suministro de agua potable en todos aquellos domicilios en los que se encuentra suspendido por falta de pago, trasladando el cobro de la deuda para el año 2021, superada que sea esta crisis sanitaria.

---

<sup>4</sup><https://www.who.int/es/news-room/detail/16-03-2020-icc-who-joint-statement-an-unprecedented-private-sector-call-to-action-to-tackle-covid-19>

4. A su vez, condenar a determinadas personas a prescindir del suministro de energía eléctrica, por falta de pago, cuando la misma es necesaria para mantener la vida, para no empeorar su salud o para no precarizar aún sus ya difíciles condiciones de vida cotidiana, más aún si se estará en situación de encierro o cuarentena domiciliaria y aislamiento social, es una indignidad y un sufrimiento que se puede y debe evitar.

Es evidente que muchos jefes y jefas de hogar en nuestro país atravesarán un escenario laboral cada vez más crítico a raíz de estos hechos de fuerza mayor, por lo que es menester asegurarles no sólo el suministro de agua potable, sino también el de energía eléctrica, a efectos de garantizar mínimas condiciones sanitarias, de protección y de dignidad para atravesar en sus hogares las cuarentenas, el aislamiento social y la crisis socio-económica que esta emergencia sanitaria conlleva.

Sabemos que existe gran población en el país que sobrevive del trabajo informal y que, sin dudas, quedará expuesta a una precarización aún mayor de sus mínimas condiciones de vida si no se regula la imposibilidad de cortes de suministro de agua potable y energía eléctrica.

Por ello es que este Proyecto de Ley propone que quienes pertenezcan al 60% de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, tengan no sólo garantizado el suministro de agua potable por el año 2020 aun cuando no pueda costearlos, sino que, también se le asegure el suministro de energía eléctrica en sus domicilios.

Del mismo modo, es imprescindible reponer en el plazo máximo de 24 horas, el suministro de energía en todos los domicilios de las personas pertenecientes a este sector social en los que se encuentra suspendido por falta de pago, trasladando el cobro de la deuda para el año 2021, superada que sea esta crisis sanitaria.

5. La misma propuesta se realiza respecto de electro-dependientes cualquiera que sea el domicilio en el que se encuentren; respecto de los adultos mayores más vulnerables de nuestro país que carecen de redes de apoyo, razón por la cual viven en residencias subvencionadas por el Estado (ELEAM), y respecto de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, que no viven con sus familias, sino en Residencias de Protección del SENAME, evitando agregar a su situación vital más

limitaciones y/o nuevas vulneraciones a su derecho a un nivel de vida adecuado.

Las personas -adultos, niños, niñas y/o adolescentes- electro-dependientes son aquellas personas que se encuentren conectadas a un equipo médico que requiere energía eléctrica constante, toda vez que, la desconexión implica poner en riesgo su salud y hasta su vida. Ellos requieren suministro continuo y adecuado de energía eléctrica, para mantener la vida o estabilidad de su situación de salud.

En marzo del año 2018, en un esfuerzo conjunto, las Compañías Distribuidoras de Electricidad y el Ministerio de Energía firmaron un convenio que busca dar seguridad y tranquilidad respecto del suministro eléctrico que requieren los pacientes electro-dependientes con hospitalización domiciliaria para vivir, siendo un gran avance para ellos y sus familias. Convenios que quedaron expresados en los [Decretos Exentos 141](#) y [142](#) del Ministerio de Energía.

En dichos convenios, sin embargo, sólo se califican como electro dependientes a aquellas personas en esta condición que se encuentren hospitalizados en un domicilio particular. Quedando fuera aquellos que tienen su residencia o domicilio en instituciones o establecimientos que presten servicios de casa-habitación, ya sea de manera permanente o transitoria, tales como Asilos de Ancianos, Casas de Reposo, Residencias denominadas Senior Suites o cualquiera que cumpla funciones similares, como por ejemplo, establecimientos de larga estadía para adultos mayores o ELEAM , o residencias del Servicio Nacional de Menores para el cuidado alternativo de niñas , niños y/o adolescentes.

Si bien el esfuerzo realizado por las empresas eléctricas se valora, es menester que en el curso de esta crisis sanitaria se otorgue certeza legal a dichos convenios más allá de su actual vigencia administrativa, a fin de precaver dificultades, y a la vez, resulta necesario extender su responsabilidad social no sólo a garantizar un suministro continuo de energía eléctrica a las personas electro-dependientes, sino a todos aquellos adultos mayores vulnerables que viven en establecimientos de larga estadía o ELEAM a cargo del SENAMA y a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en las Residencias de Protección para niños, niñas y adolescentes del SENAME, aún que se encuentren en situación de electro-dependencia, pero sí de alta vulnerabilidad.

Las personas adultas mayores que viven en Establecimientos de larga Estadía del Servicio Nacional del Adulto Mayor, así como los niños , niñas y adolescentes carentes de cuidado de sus padres que viven en Residencias de Protección de la Red del Servicio Nacional de Menores, son personas particularmente vulnerables que requieren del mayor grado de protección posible por parte del Estado, con

independencia de su condición de electro-dependientes, y por ello en este Proyecto de Ley se propone como una mínima medida precautoria impedir cortes de suministro de energía eléctrica en todos los ELEAM y las Residencias de Protección de la Red SENAME a lo largo del país, impidiendo que en medio de esta crisis sanitaria, su condición de vida sea aún más difícil y precaria debido a actos que no son de su responsabilidad.

Los ELEAM son residencias o centros de apoyo para personas mayores que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados para la mantención de su salud y funcionalidad. Difícilmente podrán cumplirse dichos objetivos, si por razones ajenas a su responsabilidad, los lugares donde viven llegasen a carecer de energía eléctrica.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) cuenta con 12 Establecimientos de Larga Estadía en funcionamiento a lo largo del país. Estos son administrados por municipios o fundaciones sin fines de lucro.

Los residentes de los ELEAM SENAMA son personas mayores con dependencia moderada y severa, con alta vulnerabilidad social. De ahí el esfuerzo y compromiso que se requiere para que se entregue cuidado de largo plazo que resguarde los derechos de las personas mayores. En los ELEAM de SENAMA, el promedio de edad de ingreso de los residentes corresponde a 78 años. Además, las personas que allí viven pertenecen al 60% más vulnerable de la población de acuerdo al Registro Social de Hogares y carecen de redes de apoyo efectivas.<sup>5</sup> De acuerdo a los certificados de defunción e informes médicos, entre las principales causas de muerte de los residentes están las fallas multiorgánicas, neumonía/bronconeumonía e insuficiencia respiratoria. Sumado a ello, la mayoría de las personas mayores residentes en estos ELEAM ingresan con varias enfermedades crónicas, tales como, hipertensión, diabetes y demencias, entre otros.

Por su parte, para la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, el SENAME cuenta con una red de más de 200 centros residenciales a lo largo de todo el país para brindarles un cuidado alternativo al de sus familias. En circunstancias de suspensión de clases en las escuelas, cuarentenas, barreras sanitarias y toques de queda, los niños, niñas y adolescentes acogidos en residencias permanecerán más tiempo en ellas y verán suspendidos sus derechos

---

<sup>5</sup> <http://www.senama.gob.cl/establecimientos-de-larga-estadia-para-adultos-mayores-eleam>

a ser visitados por sus familiares, requerirán más que nunca de energía eléctrica para sus actividades cotidianas, y es deber de todos procurar que así sea.

Del mismo modo, y por la misma razones, es imprescindible reponer en el plazo máximo de 24 horas, el suministro de energía eléctrica en todos aquellos ELEAM y Residencias de Protección de la Red SENAME en los que pudiese estar suspendido por falta de pago, trasladando el cobro de la deuda para el año 2021, superada que sea esta crisis sanitaria.

En virtud de todas las razones antes referidas, presento el siguiente Proyecto de Ley:

### PROYECTO DE LEY

“Artículo 1°. -A partir de la vigencia de esta ley las empresas de servicios sanitarios que operen en el territorio nacional no podrán realizar ningún corte de suministro de agua potable residencial, comercial o industrial por retraso o no pago de las respectivas cuentas por todo el resto del año 2020, quedando facultada la Superintendencia de Servicios Sanitarios para garantizar el fiel cumplimiento de esta ley, adoptando las medidas e impartiendo las instrucciones necesarias y conducentes para ello. Dicha autoridad sustanciará sumarios sancionatorios frente a cualquier tipo de incumplimientos de esta obligación por parte de las empresas sanitarias, habilitando la denuncia digital y la tramitación online de los respectivos procesos. Los montos de las multas a aplicar podrán ser el doble de las actuales y la reincidencia reiterada facultará a la Superintendencia para la intervención operacional de la empresa sanitaria infractora por el solo ministerio de la ley, con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, y no procediendo recurso judicial alguno en contra de su actuar durante todo el periodo de vigencia de esta ley. Esta ley comenzará a regir desde su publicación en el diario oficial de la República de Chile”.

“Artículo 2°. - A partir de la vigencia de esta ley las compañías distribuidoras de electricidad que operen en el territorio nacional no podrán realizar ningún corte de suministro de energía eléctrica en los domicilios particulares de las familias que pertenezcan al 60% de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; en los que vivan personas electro- dependientes, en los Establecimientos de larga Estadía del Servicio Nacional del Adulto Mayor, ni

en las Residencias de Protección de Niños Niñas y Adolescentes vulnerados en sus derechos de la Red del Servicio Nacional de Menores, por retraso o no pago de las respectivas cuentas por todo el resto del año 2020, quedando facultada la Superintendencia de Electricidad y Combustible para garantizar el fiel cumplimiento de esta ley, adoptando las medidas e impartiendo las instrucciones necesarias y conducentes para ello. Dicha autoridad sustanciará sumarios sancionatorios frente a cualquier tipo de incumplimientos de esta obligación por parte de las empresas de electricidad, habilitando la denuncia digital y la tramitación online de los respectivos procesos. Los montos de las multas a aplicar podrán ser el doble de las actuales y la reincidencia reiterada facultará a la Superintendencia para la intervención operacional de la empresa de electricidad infractora por el solo ministerio de la ley, con el auxilio de la fuerza pública de ser necesario, y no procediendo recurso judicial alguno en contra de su actuar durante todo el periodo de vigencia de esta ley. Esta ley comenzará a regir desde su publicación en el diario oficial de la República de Chile”.

#### DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

“A partir de la entrada en vigencia de esta ley, las empresas de servicios sanitarios y las compañías distribuidoras de electricidad que operen en el territorio nacional deberán reponer los respectivos suministros suspendidos por retraso o falta de pago en todos los domicilios a los que se refieren los artículos primero y segundo de esta ley, dentro del plazo máximo de 24 horas, posponiendo el cobro de la deuda para el año 2021”.

---

